

Dulces palabras, pero amargos hechos en la industria azucarera de Trinidad

Son pocas las personas que se permiten cuestionar la necesidad de reestructurar la industria azucarera de Trinidad. Sin embargo, el Gobierno de ese país parece decidido a hacer solo las cosas, sin el tan necesario diálogo con las personas implicadas, lo que incluye a los trabajadores y sus sindicatos. La experiencia vivida en otros lugares del Caribe muestra que el consenso es la clave para que las reformas tengan éxito.

Jorge Chullén
UITA

El 17 de febrero de 2003, se ofreció a la totalidad de los 9.200 empleados de Caroni (1975) Ltd. la posibilidad de adherirse al programa de retiro voluntario del empleo «mejorado». El Gobierno actual estaba iniciando con ello la reestructuración de Caroni, la empresa azucarera estatal y única procesadora de caña de azúcar de esa isla del Caribe. Aun cuando el proceso de reestructuración es necesario, el mismo carecía de un programa bien estructurado y, más importante todavía, no contaba con el apoyo de las principales partes implicadas en esa industria.

Si bien la industria azucarera de Trinidad es pequeña con relación a los niveles internacionales, comparte muchas de las características de las industrias azucareras tradicionales del resto del mundo: un sector agrícola con un cultivo predominante, a escala regional pero a veces inclusive nacional; estructuras sociales y políticas estrechamente vinculadas a la fuerza laboral de la industria; una mano de obra formada mayoritariamente por trabajadores agrícolas no calificados. La índole de los retos que plantea reestructurar una empresa (y una industria) hace del caso de Trinidad un ejemplo clásico de la reestructuración de cualquier industria que fabrica azúcar de caña.

Caroni (1975) Ltd. fue fundada a comienzos de los años setenta, luego de que el Estado adquiriera las acciones de Tate & Lyle, entonces una gran multinacional azucarera. Caroni fabrica azúcar, produce

la caña necesaria para ello y cuenta con dos ingenios y una refinería. En 2002 Caroni produjo alrededor de 91.000 toneladas de azúcar. La empresa, que controla cerca de 77.000 acres de tierra, también está considerada el mayor terrateniente del país y tiene participación en la producción de arroz, cítricos y ron, entre otras cosas. Caroni emplea a unas 9.200 personas. El sindicato de trabajadores y afines de Trinidad (ATSGWTU) representa a unos 8.100 «journaleros», mientras que cuatro asociaciones diferentes de personal tienen afiliado al resto de los 1.100 empleados «mensuales». En la isla hay cerca de 6.000 cultivadores independientes de caña de azúcar.

Contrariamente a lo que ocurre con la industria del petróleo, el azúcar no tiene gran peso en la economía nacional pero sí una considerable influencia a escala regional: las comunidades de las zonas donde se cultiva la caña de azúcar, en el centro de Trinidad, dependen del azúcar para su sustento cotidiano, al tiempo que la empresa les proporciona algunos servicios sociales, como atención médica y recreación, además de infraestructura vial.

El empleo en una reestructuración sin diálogo

A comienzos de 2003 hubo casi todos los días en los medios nacionales de comunicación acaloradas discusiones acerca de la

reestructuración de Caroni. Si bien dicho debate es algo necesario para el país, en este caso sustituyó a la información sobre el proceso y sobre los planes comerciales para la nueva empresa Caroni que el Gobierno debería haber proporcionado.

Lo que hizo el Gobierno, en cambio, fue ofrecer un plan de retiro voluntario «mejorado», que no se había negociado con el sindicato. En realidad, el Gobierno inició la reestructuración apartando del proceso al sindicato y a los trabajadores que el mismo representa, a pesar de que son los principales implicados en la industria. El Gobierno ha sostenido que en realidad había hecho un «proceso de consulta» con el sindicato, las asociaciones de personal y las organizaciones de cultivadores; el sindicato sostiene que se le «informó» sobre el proceso pero no se le dio nunca participación en el mismo. (Un examen detenido de los informes de algunas de las reuniones muestra que tenía bastante acceso a las reuniones informativas, donde los participantes planteaban algunas preocupaciones, pero que no se trataba de una labor de colaboración.)

El programa de retiro voluntario abarca tres ámbitos: en primer lugar, la indemnización se calcula sobre la base de los convenios colectivos que, en el caso de los jornaleros, habían expirado en diciembre de 2001 y cuya renovación se estaba negociando. (Uno de los puntos postergados en las negociaciones era la fórmula para calcular las indemnizaciones.) En segundo lugar, las jubilaciones se pagarían según las reglas de los planes de jubilación, pero no se entregó a los trabajadores ninguna constancia de los montos que se pagarían (véase más adelante). En tercer lugar, se anunciaron, asimismo, los programas de respaldo, como el acceso a la tierra para cultivarla y los programas de asesoramiento y capacitación. La «mejora» del retiro voluntario consiste en una suma a pagar por única vez basada en un porcentaje de la indemnización, que varía según los distintos grupos de edad. El Gobierno dio a los empleados un plazo de 45 días (que finalizaba el 3 de abril) para tomar una decisión con respecto al plan

de retiro voluntario propuesto. Los pagos de las indemnizaciones a los jornaleros se harían efectivos el 10 de julio y para los empleados mensuales y el personal permanente el 2 de agosto.

La oferta «mejorada» de retiro voluntario no contó con un pronto ni masivo respaldo entre los jornaleros debido a la indemnización relativamente baja – incluida la prima – y al confuso texto con el que se presentaba. El Ministro de Agricultura comunicó a los medios, por ejemplo, que si los trabajadores no aceptaban el programa se los despediría. En un documento gubernamental se dice que en caso de que los empleados dieran una respuesta «favorable», la empresa procuraría volver a tomarlos en función de las necesidades y bajo contrato, con nuevos términos y condiciones de empleo. El Ministro de Comercio brindó una cifra: la nueva empresa Caroni volvería a tomar al 75 por ciento de los empleados que optarían por el retiro voluntario. El tomarlos «bajo contrato» implica que los puestos de trabajo serían precarios y que los empleados podrían no tener derecho de afiliarse a sindicatos.

Además, la oferta de retiro voluntario tenía algunas falencias técnicas, especialmente en lo relativo a las jubilaciones. A comienzos de febrero, antes de que se ofreciera el retiro voluntario, una empresa de actuarios y asesores, contratada para revisar las prestaciones dentro del marco de los planes de jubilación de la empresa, le comunicó a esta última que tenía «serias preocupaciones» en cuanto a la exactitud de los datos sobre los trabajadores y que resultaría engañoso proporcionar a los empleados declaraciones sobre las jubilaciones que se pagarían. (Se contrató a otra empresa para efectuar la auditoría de los datos de la empresa.)

Los miembros del sindicato, en su mayoría jornaleros agrícolas, ya preocupados por la pérdida de sus puestos de trabajo, una indemnización relativamente baja, su falta de calificaciones y la escasez de otros puestos de trabajo, tuvieron que tomar la decisión de abandonar o no sus trabajos sin disponer de información adecuada.

La propuesta gubernamental de reestructuración

La reestructuración de Caroni es un viejo tema de debate en Trinidad y con el correr de los años se han hecho muchos estudios e informes al respecto. No obstante, es sorprendente que el Gobierno no haya dado información sobre el calendario de reestructuración ni sobre los planes comerciales de la nueva empresa. En términos generales, la propuesta gubernamental incluía el cierre de una fábrica para finales de la cosecha de 2003 (julio) y reducir la producción de 75.000 a 80.000 toneladas de azúcar en la fábrica de St. Madeleine. Caroni ya no cultivará caña de azúcar y, a partir de 2004, los cultivadores independientes suministrarán toda la caña necesaria, al tiempo que se tomarán disposiciones para que los cultivos de caña se hagan en las mejores tierras, se utilicen las mejores variedades de caña y se dé un uso eficiente a la maquinaria.

La nueva empresa Caroni se concentrará en la manufactura y el refinado del azúcar, pero los bienes de Caroni comprenden mucho más que una fábrica y una refinería. Los aproximadamente 77.000 acres de tierra que tiene Caroni se transferirían al Estado y su administración correría por cuenta de un nuevo organismo (denominado Estate Management and Business Development Company), que el poder ejecutivo creó en junio de 2002. Además, habrá participación de inversores del sector privado en sectores de producción como el de los cítricos, el arroz, el refinado de azúcar, productos lácteos y cárnicos, como así también en áreas de trabajo como la ingeniería de tractores y maquinaria agrícola, gestión de recursos humanos, servicios de transporte y otros.

En la enunciación de la propuesta no se incluía información técnica ni económica, ni tampoco debate público, elementos clave en un sector con connotaciones tan políticas como el del azúcar. Algunos miembros del Parlamento del grupo gubernamental declaraban, por ejemplo, que no había planes sobre la manera de alcanzar tales metas; otros, que los planes esta-

rían disponibles cuando las tierras de Caroni pasaran al Estado.

Probablemente ésta haya sido la segunda de las principales áreas donde la reestructuración no consiguió el respaldo de las distintas partes implicadas en esa industria. La manufactura de azúcar es una actividad que tiene siglos de antigüedad y donde no hay fórmulas secretas para conseguir el éxito de un día para el otro. Como integrantes del personal jerárquico de Caroni comentaron a este cronista, la meta de producción propuesta exige, entre otras condiciones, caña de cierto largo, que los cultivadores suministren caña de calidad suficientemente buena, que no haya percances técnicos, que no haya pérdidas de tiempo de ningún tipo. Es fundamental que se hagan nuevas inversiones en la fábrica porque, aun cuando se dispusiera del volumen de caña requerido para producir la cantidad de azúcar fijada, la fábrica tiene limitaciones técnicas para procesar dicho volumen. Si no se hacen mejoras – ni se anuncian mejoras futuras – de la vieja fábrica St. Madeleine, el personal dudaba con toda razón de que se pudiera alcanzar la meta propuesta de 75.000 a 80.000 toneladas, valor bruto. Se trata de características propias de la industria, que exigen un trabajo preparatorio, inclusive antes de contemplar los aspectos financieros o económicos.

La política y el azúcar

La reestructuración de Caroni (1975) Ltd. es un proceso importante – y difícil – para Trinidad, que, además, tropieza con el gran obstáculo de la falta de diálogo entre los interlocutores sociales (es decir, gobierno, empresa y empleados), lo que puede hacer fracasar cualquier intento razonable de reestructuración.

Entre 1991 y 1993, se llevaron a cabo en la industria las tareas del denominado Comité Tripartito, que propuso una serie de pasos para poner a Caroni «nuevamente en marcha». La fuerza de dicha experiencia radica en que todos los grupos interesados en el azúcar habían acordado por unanimidad

la manera de avanzar, además de los méritos técnicos o económicos de la propuesta misma. No obstante, algo anduvo mal, ya que el Gobierno («accionista de Caroni») no proporcionó los recursos necesarios en tiempo oportuno para financiar tal propuesta. La política y los políticos han influido – en mayor o menor intensidad – en las industrias azucareras del Caribe, y Trinidad no es una excepción: la industria azucarera y sus trabajadores siempre han desempeñado un papel de importancia crucial en la historia del país, y han sido y son la base de los movimientos políticos. Si la influencia o interferencia política en la industria es o no un argumento de suficiente peso para explicar el fracaso de los esfuerzos concertados para la reestructuración es un interrogante que deben contestar los grupos azucareros de Trinidad.

En la situación existente en 2003, ningún grupo de la industria azucarera se opone a la reestructuración de Caroni. Sin embargo, los grupos se revelaron incapaces de crear las condiciones requeridas para que hubiera un verdadero diálogo, lo que es lamentable para el país, porque Caroni tiene capital humano y capacidad técnica para llevar a cabo una reestructuración bien planeada, que tome en cuenta objetivos sociales y económicos, y puede intentar minimizar los trastornos sociales implícitos en toda reestructuración. Tal diálogo es necesario para garantizar que se lleve a cabo una reestructuración sensata, especialmente cuando se toman en cuenta las nuevas realidades de la industria azucarera internacional reestructurada.

Una industria azucarera internacional reestructurada

La reestructuración de Caroni (1975) Ltd. responde en parte a factores locales, pero también es cierto que las evoluciones internacionales influyen en la industria de Trinidad y tendrán bastante importancia en la nueva Caroni y la nueva industria azucarera de Trinidad. Diversos funcionarios gubernamentales aludieron a las «evoluciones adversas de largo plazo» en el es-

cenario internacional del azúcar, considerándolas una de las principales razones de la reestructuración propuesta. Declararon que el Estado ya no puede continuar financiando los operativos de Caroni ni podría proteger a la empresa de la competencia de productores con menores costos.

La industria azucarera internacional actual está cada vez más mundializada, como lo ejemplifica la presencia del barato azúcar brasileño en prácticamente todo el planeta, mientras que la proliferación de los acuerdos de libre comercio – a pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no consiguiera liberalizar más el comercio en la agricultura – dificulta las políticas proteccionistas, aun cuando son convenientes. Los mercados del azúcar están cambiando. Por ejemplo, las tendencias internacionales que se acaban de mencionar, combinadas con las evoluciones europeas (por ejemplo, la reforma de la política agrícola comunitaria y el proceso de ampliación de la Comunidad), ejercen presión para que se reforme el régimen azucarero de la UE, lo que está íntimamente relacionado con los mercados preferenciales de que gozan los productores de azúcar de los países de África, Caribe y el Pacífico (ACP), incluida Trinidad.

Estas evoluciones son parte de la reestructuración de la industria azucarera internacional, un proceso complejo en sí mismo. La reestructuración combina procesos que tienen decenios de antigüedad con evoluciones más nuevas, cambios geográficos y avances tecnológicos, nuevas relaciones laborales con programas de liberalización económica. Por ejemplo, el centro-sur de Brasil (gracias a una asombrosa sinergia de producción de azúcar y combustible de alcohol – etanol – a partir de la caña de azúcar) y algunos países asiáticos tienen una influencia determinante en los fundamentos del azúcar: producción, consumo, comercio internacional. Los avances tecnológicos favorecen la consolidación de la producción y la concentración de la propiedad: las empresas azucareras ahora son más grandes y poderosas; las nuevas fábricas tienen mayor capacidad de procesamiento, maquinaria más versátil y están

surgiendo procesos regidos por computación, inclusive para la mediana industria. Hace mucho tiempo que la industria conoce esas evoluciones, pero a comienzos de los noventa, la introducción masiva de reformas de mercado y de programas de liberalización económica hizo que se vinculara la eficiencia a la obtención de ganancias. Las industrias azucareras del mundo fueron viendo que cada vez más se las medía comparándolas con los productores de menor costo y se ejercía presión sobre ellas para que obtuvieran mayores ganancias, inclusive en el caso de empresas estatales como Caroni (1975) Ltd., cuya meta fundamental nunca había sido la obtención de ganancias.

El diálogo social y los interlocutores sociales

Una nueva Caroni y la nueva industria azucarera en Trinidad operarán dentro de este contexto mundializado donde no se prevé que como regla haya menos competencia sino todo lo contrario. Es necesario que las partes involucradas en la industria lleguen a un consenso sobre la manera de avanzar y que dicho consenso, alcanzado con lujo de información, sienta las bases para proponer los objetivos comerciales, como se hizo entre 1991 y 1993.

Otros casos que tuvieron lugar en el Caribe de habla inglesa arrojaron luz sobre la índole de esta práctica social. Por ejemplo, la industria azucarera de Guyana dio un drástico giro a comienzos de los noventa que le permitió mejorar notablemente, cuando la injerencia política en la industria prácticamente cesó y las partes implicadas en la misma estuvieron en condiciones de forjar una visión común del futuro de la industria. La industria de Guyana se ha hecho lo suficientemente fuerte como para resistirse a una recomendación de 2001 del Banco Mundial (y cambiarla) por la cual se debía cerrar la mitad de la industria. Actualmente, la industria está expandiéndose aunque no se han solucionado todos los problemas: en el momento de redactar este artículo está en curso un juicio por ar-

bitraje salarial porque en 2002 las partes no consiguieron llegar a un acuerdo.

En 2002, dentro del contexto de las negociaciones salariales de Barbados, las partes implicadas en la empresa y el Gobierno acordaron un programa de reestructuración de la industria: a mediados de 2002 se cerró un ingenio, otro cerrará antes de 2005, con lo que la industria quedará funcionando con un solo ingenio. En este caso, lo importante fue que el sindicato Barbados Workers' Union (BWU) negoció los nuevos términos y condiciones de trabajo del personal y la empresa sometió al sindicato las cartas propuestas para empleo, reducción de personal y despido antes de remitirlas a los trabajadores. El BWU describe el proceso calificándolo de «consultivo y cooperativo».

La reestructuración de Caroni (1975) Ltd. y de la industria azucarera de Trinidad tiene que hacer frente y resolver difíciles retos políticos y económicos, e inclusive raciales, y todos ellos hacen que el diálogo sea aún más necesario. Una de las partes responsables es el Gobierno (el Ejecutivo), que tiene la tarea de entablar, conducir y mantener un diálogo real e informado con el sindicato, los trabajadores y el resto del país. Sin embargo, esto no está sucediendo y el proceso podría complicarse aún más: el Ejecutivo ha reemplazado a la junta directiva y la ejecutiva de la fábrica con un comité interministerial encargado de la reestructuración. El Gobierno (el Ejecutivo) y la empresa se convirtieron en una sola entidad, centralizando gran poder, pero, al mismo tiempo, con esto denegaron a la dirección especializada la ocasión de contribuir al proceso (aunque más no fuera ayudando a despolitizar distintas cuestiones). En segundo lugar, en la historia reciente de la industria azucarera de Trinidad, las metas políticas han sido muy fácilmente retratadas como las metas de Caroni.

Debido a la manera en que se inició la reestructuración, las relaciones laborales (despido de trabajadores) y el sindicato de trabajadores de la industria azucarera (que representa a la aplastante mayoría de los empleados de Caroni) pasaron a ser

el centro de atención y los protagonistas de un proceso que podría cambiar drásticamente la sociedad de Trinidad. Reestructurar la empresa Caroni es reformar todo un sector económico que depende de esa empresa y liberar considerables bienes económicos que están bajo su control.

Este proceso exige un diálogo democrático y abierto. La principal responsabilidad de un sindicato es representar y defender los derechos de los trabajadores, pero, en determinadas circunstancias, un sindicato también habla en nombre de la población en general.
